



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Impacto de la tortura psicológica en Colombia.¹

Gabriela Flórez Mora

Universidad Católica de Colombia

Resumen

El presente artículo aborda las diferentes conductas desplegadas por los actores del conflicto armado interno en Colombia, que se pueden considerar como actos de tortura a nivel psicológico. Lo anterior, considerando que desde diversos estudios se ha logrado documentar la perturbación emocional que han sufrido algunas de las víctimas del conflicto, especialmente en las comunidades distantes de las cabeceras urbanas, quienes han estado inmersos en la guerra por varios años. En ese sentido, la presente investigación realiza un estudio heurístico sobre la tortura psicológica en el panorama nacional, a través de la caracterización del impacto que esta situación ha generado en la sociedad colombiana, con el fin de aportar un referente académico que permita el desarrollo de ideas para la formulación de propuestas relacionadas con la creación de normas orientadas a la prevención de hechos de tortura psicológica como un arma dentro del conflicto.

Palabras Clave: Colombia, Tortura Psicológica, Conflicto Armado, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Víctimas, Impacto psicológico.

Abstract

This article deals with the different behaviors displayed by the actors of the internal armed conflict in Colombia, which can be considered as acts of psychological torture. The foregoing, considering that various studies have documented the emotional disturbance suffered by some of the victims of the conflict, especially in the distant communities of the urban capitals, who have been immersed in the war for several years. In this sense, the present investigation carries out a heuristic study on psychological torture in the national panorama,

¹ Artículo de reflexión presentado como requisito para optar al título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia por la Estudiante de Derecho con materias culminadas, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificada con código estudiantil N° 2110942. Correo institucional: gflorez42@ucatolica.edu.co, bajo la asesoría del Docente Nataly Macana Gutierrez, abogada de la Universidad Santo Tomás, docente de la Universidad Católica de Colombia 2019.

through the characterization of the impact that this situation has generated in Colombian society, in order to provide an academic reference that allows the development of ideas for the formulation of proposals related to the creation of norms oriented to the prevention of acts of psychological torture as a weapon within the conflict.

Key words: Colombia, Psychological Torture, Armed Conflict, Human Rights, International Humanitarian Law, Victims, Psychological Impact.

Sumario.

Introducción. 1. Evolución normativa y jurisprudencial de la tortura en la modalidad psicológica. 1.1 Evolución normativa de la tortura psicológica en Colombia. 1.1.1 Los elementos del tipo penal de Tortura en Colombia 1.2 Evolución jurisprudencial sobre la tortura en Colombia. 2. La modalidad de tortura psicológica. 3. Casos de tortura desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 3.1 Cantoral Benavides Vs. Perú. 3.2 Maritza Urrutia Vs. Guatemala. 4. Los actos de tortura psicológica en Colombia. Conclusiones. Referencias.

Introducción.

En Colombia, las consecuencias del conflicto armado han sido evidentes en gran parte de la población que habita el territorio rural, dentro de dichas consecuencias, se ha identificado la existencia de perturbaciones emocionales derivadas de los hechos sucedidos en el marco del conflicto armado interno que castigó a la sociedad, cuyos efectos sobre distintos sectores de la población son impactantes, especialmente en las comunidades distantes de las cabeceras urbanas, sometidas a los vejámenes por parte de los actores armados.

De igual manera, los agentes de la fuerza pública del Estado se han visto inmersos en una serie de cuestionamientos debido a la utilización de mecanismos de interrogatorio no convencionales ni aprobados, mediante los cuales han buscado obtener información o presionar a algún individuo.

Debido a lo anterior, y con el ánimo de hacer una reflexión acerca de los casos de tortura psicológica que se han identificado en el panorama nacional, este artículo se ha propuesto realizar una caracterización del impacto que ha tenido en nuestra sociedad este tipo de eventos, así como las acciones que se han tomado por parte del Gobierno colombiano para la

sanción y prevención de este tipo de hechos. Con esto, se busca aportar un referente académico que pueda aportar a la formulación de propuestas desde la academia y la creación de normas que procuren prevenir la criminalidad derivada de este flagelo.

En razón de los precedentes expuestos, este artículo de reflexión se ha planteado como pregunta de investigación la siguiente: ¿Qué tipo de eventos de tortura psicológica se han identificado en Colombia?, para lo anterior se ha realizado un recorrido por la evolución normativa y jurisprudencial sobre la tortura psicológica, para posteriormente abordar desde la doctrina las consideraciones sobre la modalidad de tortura psicológica, terminando con un análisis de estos hechos desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un análisis de los casos sobre tortura psicológica identificados en Colombia.

El desarrollo de esta investigación se realizará a partir de una metodología documental descriptiva (Ávila, 2006) que consiste en el estudio de fuentes primarias y secundarias del caso colombiano, y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual se realiza una heurística sobre el tema tratado.

1. Evolución normativa y jurisprudencial de la tortura en la modalidad psicológica.

La lucha contra las diferentes expresiones de violencia que se presentan en la sociedad, y los actos de guerra que se presentan en medio de los conflictos armados, han tenido que ser sujetos a una regulación específica con el fin de establecer límites a los comportamientos de los actores armados dentro del conflicto. Esto se ha generado debido a las prácticas comunes de uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento, el reclutamiento forzado de menores de edad, el abuso sexual, entre otros, que generan una evidente vulneración a los Derechos Humanos (Naranjo, 2001).

Por esta razón se ha considerado que ciertos comportamientos no son admisibles ni siquiera en el marco de un conflicto armado, así entonces como lo indican Bernal & Moya (2018) desde el derecho internacional se ha buscado erradicarlos penalizándolos y creando herramientas como tratados y convenios que tienen como finalidad que en los Estados no se

repliquen dichas prácticas, el conjunto de estas normas se denomina Derecho Internacional Humanitario.²

Es así, como desde el Derecho internacional se han proscrito y penalizado todas las prácticas de tortura tanto física como psicológica, como lo evidencia González Monguí (2017) quien expresa lo siguiente:

La tortura también se encuentra proscrita en el ordenamiento internacional, desde el que se han desarrollado los instrumentos para prevenirla y sancionar su práctica, que no debiera existir en sociedades democráticas, en donde éticamente se ha construido una legislación sobre la base de la dignidad humana y el respeto a los Derechos Humanos, lo cual impide la tortura y los tratos crueles e inhumanos. La prohibición de la tortura es de la categoría más alta de las normas internacionales, es una norma del *ius cogens* una prohibición inderogable, al igual que la prohibición de la desaparición forzada (p.207).

En ese sentido, cabe precisar que las normas de *ius cogens* o normas imperativas de derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 53³ la Convención de Viena, son aquellas que pese a no estar consagradas de manera taxativa en un tratado o catálogo, protegen a los individuos de violaciones a los Derechos Humanos que afectan valores básicos de la comunidad, como es el caso de la tortura que es una conducta que se considera proscrita en todo los países (Aguilar, 2016).

La tortura en la actualidad está tipificada como un crimen en el derecho internacional, y en el derecho interno de la mayoría de los Estados. La prohibición de cualquier acto de tortura, reviste una especialidad ya que “forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun

² El Derecho Internacional Humanitario es de acuerdo con lo señalado por la Organización de Estados Americanos la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Para ampliar sobre este tema ver: Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Apuntes preliminares. (2018). Bernal Castro, Carlos Andrés y Moya Vargas, Manuel Fernando. Editorial Universidad Católica de Colombia.

³ Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura” (Organización de Naciones Unidas, 2003, p.5).

En este orden de ideas, las organizaciones de derecho internacional han desplegado todos sus esfuerzos con el fin de crear herramientas que permitan eliminar todo acto de tortura alrededor del mundo. En 1948 a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos la comunidad internacional prohibió cualquier tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de los seres humanos; y posteriormente en 1984 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Cabe resaltar que el Estado colombiano ratificó la Convención mencionada con anterioridad a través de la Ley 70 de 1986, y a partir de allí ha desarrollado una legislación encaminada a erradicar todo acto de tortura tanto en la esfera física como psicológica. No obstante, lo anterior, Novoa & Escamilla (2017) aseguran que en Colombia dentro de los actos cometidos en el marco de conflicto armado se han presentado diversos hechos que se pueden considerar como tortura. Es necesario, en medio de los precedentes esbozados, realizar un análisis acerca de la evolución normativa y jurisprudencial que la conducta típica de tortura ha tenido en el Estado colombiano.

1.1 Evolución normativa sobre la tortura en Colombia:

En Colombia, antes de la expedición de la Constitución de 1991, ya se habían adquirido por parte del Estado obligaciones internacionales relacionadas con la prohibición de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en virtud de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas.

No obstante, es necesario aclarar que la tortura ha sido considerada como una conducta punible desde la expedición del Decreto Ley 100 de 1980, situación que permanece en la Ley 599 del 2000 a través del artículo 178. Sin embargo, la Constitución de 1991 al señalar dentro de la categoría de derechos fundamentales la libertad personal y la dignidad humana, protege a los individuos de hechos de tortura indirectamente (Cubides, Grandas & González, 2016). Así mismo, dicha normativa se ha fortalecido a través de los tratados internacionales que han

sido integrados al ordenamiento jurídico colombiano a través de la figura del bloque de constitucionalidad⁴.

1.1.1 Los elementos del tipo penal de Tortura en Colombia:

Ahora bien, en materia penal el Código Penal colombiano tipifica la comisión de hechos de tortura como una conducta punible descrita en el artículo 178 que expresa a su tenor literal lo siguiente:

ARTICULO 178. TORTURA. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

La descripción del tipo penal de tortura tiene un sujeto activo indeterminado, es decir cualquier persona que ejecute o cause a través de actos algún tipo de dolor o sufrimiento físico o **psíquico** (Velásquez, 2010). Este tipo penal tutela el bien jurídico de la libertad y la integridad personal, que hace referencia a la esfera física y psicológica del ser humano.

Al respecto la Corte Constitucional, ha expresado lo siguiente:

La conducta de tortura no sólo puede predicarse del Estado sino también de los particulares. Por ello, no solo debe sancionarse al Estado, sino también a los particulares, cuando quiera que la cometan. La tortura es una de las muchas formas como se puede vulnerar el derecho a la integridad personal. Los tratos y las penas

⁴ El bloque de constitucionalidad es definido por la Corte Constitucional colombiana como “aquella unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu”. Ver Sentencia C-067/03.

cruelles, inhumanas o degradantes son, por ejemplo, otras formas de vulnerar ese derecho (Corte Constitucional, C-587 de 1992).

Ahora bien, en cuanto del verbo rector que para este caso es *infligir*, de acuerdo con lo dispuesto por la Real Academia de la Lengua Española (2019) esta palabra viene del latín “*infigere*” que significa herir o golpear, y significa causar un daño o imponer un castigo, de modo que a simple vista parece redundante la redacción de esta conducta punible, ya que el complemento del tipo penal sugiere el mismo significado de dicha palabra. Por otra parte, el bien jurídico tutelado es la libertad individual, y como lo indica González Monguí (2017) buscan proteger la autonomía personal de los individuos.

Es necesario aclarar que este tipo penal es considerado como pluriofensivo, es decir que atenta contra varios bienes jurídicos, como bien se identifica en la figura 1 que se muestra a continuación.

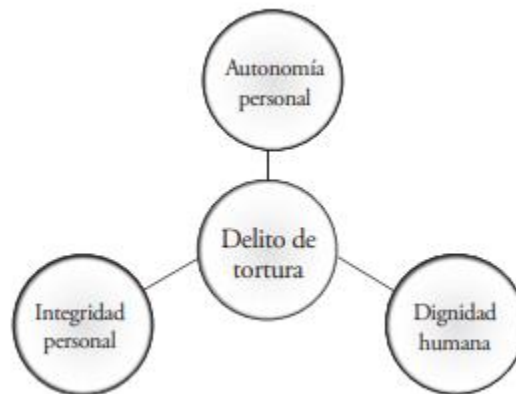


Figura 1. Bienes jurídicos vulnerados por el delito de tortura. Suárez (2007).

Como se observa en la figura anterior, el delito de tortura afecta varios bienes jurídicos tutelados, si bien en principio podría pensarse que afecta la integridad personal únicamente, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de dejar en claro que se debe considerar un delito pluriofensivo en tanto que afecta otros bienes jurídicos conexos a la integridad como la autonomía personal y la dignidad humana.

Ahora bien, dentro de los elementos subjetivos del tipo, se identifica que el sujeto activo tenga como fin obtener una confesión o algún tipo de información, o castigar a una persona por algún hecho que presuma realizado por la víctima, o que quiera con los actos de dolor infringidos intimidarla o coaccionarla.

En esa medida, y de acuerdo con las disposiciones emanadas de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA de 1985, se considerará como elemento subjetivo o móviles específicos de la tortura los fines de investigación criminal, cualquier fin intimidatorios, los fines de castigo personal, los fines preventivos, los fines punitivos, o cualquier otro fin (Suárez, 2007).

Frente al análisis del tipo penal descrito, Guerra & Ruiz (2011) indican que la descripción del tipo penal ha variado, en orden a los principios y valores constitucionales expuestos en 1991, y de igual manera el tema ha sido tratado acorde a la evolución de instrumentos de derecho internacional, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que fue aprobada en Colombia mediante Ley 409 de 1997 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue aprobado en Colombia mediante la Ley 742 de 2002.

Es importante señalar la relevancia de dichos instrumentos internacionales sobre la sanción de la tortura, teniendo en cuenta que la misma es una práctica eventual que se realiza en algunos países y se reconoce tácitamente como un método para obtener información, en ese sentido esta normatividad internacional busca imponer la obligación a los Estados parte de prevenir cualquier acción de este tipo, e investigar y sancionar estos hechos cuando las autoridades internas de estos no lo hagan (Reyes, 2007).

1.2 Abordaje de la Tortura psicológica en la jurisprudencia sobre la tortura en Colombia:

La evolución jurisprudencial sobre la tortura en Colombia dada por la Corte Constitucional, se refiere de manera concreta a la tipificación de la conducta punible, sus modalidades, su prohibición constitucional, entre otros. Muchas de estas sentencias son producto de la declaración de exequibilidad de los tratados internacionales mencionados anteriormente.

Respecto de la definición de tortura la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente:

Así, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tortura es un delito que atenta contra la dignidad humana para obtener resultados variados como información, castigos o coacciones; usando métodos que producen grave dolor, sufrimientos o aflicción en las víctimas, sometiendo su voluntad a la del torturador. No obstante, lo anterior, también ha expresado, que los dolores o sufrimientos que son consecuencia de sanciones legítimas o inherentes a éstas quedan excluidos del concepto de tortura. Esto se debe entender en el sentido de que las penas, dolores o sufrimientos que sean única y exclusivamente consecuencia o inherentes por naturaleza a las sanciones legítimas que están estipuladas por la ley, no se considerarán tortura, siempre y cuando su aplicación no incluya la realización de los actos o la aplicación de los métodos considerados como tal. (Corte Constitucional, Sentencia C-143 de 2015).

La Corte Constitucional hace claridad respecto de las conductas que se deben entender como tortura y a su vez es enfática en determinar que los únicos tratos que no pueden ser considerados como tortura son aquellos que se presentan en razón de sanciones o penas legítimamente impuestas, sin que esto implique que se puedan ejercer tratos inhumanos contra las personas a las cuales se les ha impuesto una sanción, ya que como lo indican Arenas & Cerezo (2016) en todo caso las personas privadas de la libertad conservan sus derechos fundamentales intactos.

La Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres grupos: (i) Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) Los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad en las cárceles. (iii) Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente de la dignidad del ser humano y por lo tanto son intocables, como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad religiosa, a la personalidad jurídica, de petición, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia (Corte Constitucional, Sentencia T-049 de 2016).

En este sentido, es necesario indicar que la Corte Constitucional refiriéndose a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, ha indicado que si bien algunos derechos se ven restringidos como por ejemplo la libertad de locomoción, existen otros que deben permanecer incólumes como el derecho a la vida y la dignidad humana, razón por la cual las personas que se encuentren privadas de su libertad en ningún momento pueden ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia un ser humano, y en todo caso el Estado debe ser garante de que esta conducta no ocurra ni siquiera en el entorno de privación de la libertad de un individuo.

Ahora bien, la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional en Colombia ha sido fundamental para dar alcance a la conducta descrita en el Código Penal colombiano, ya que como se avizoró anteriormente la redacción de este resulta confusa en ciertos aspectos, por lo que se ha tenido que realizar varias aclaraciones sobre el tema.

En esa medida, la Corte Constitucional, ha expresado respecto del tipo penal de la tortura que la prohibición de la tortura tiene una relación inescindible con el principio de dignidad humana, la integridad y libertad personal, aun en escenarios de privación de la libertad (Corte Constitucional, C-143 de 2015).

2. La modalidad de tortura psicológica.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la tortura psicológica hace referencia a la acción de infligir dolor y causar daño en la esfera psicológica del ser humano. Los fines de la tortura son explicados por Pavón (2017), de la siguiente manera:

Es verdad que el objetivo último no es exactamente psicológico, pues consiste en la obtención de la verdad en los interrogatorios, pero este objetivo mediato se alcanza invariablemente a través de un propósito psicológico inmediato: la coerción y la resultante regresión del torturado, su anulación o sometimiento, la inhabilitación de su voluntad, la supresión de su personalidad, la neutralización de sus resistencias o de sus defensas, la desintegración o desorganización y la sucesiva reorganización o reprogramación de su psiquismo. Todos estos fines psicológicos justifican psicológicamente la tortura como un medio eficaz para alcanzarlos y también para alcanzar, a través de ellos, la obtención de la verdad en el interrogatorio (p.18).

En ese sentido, es evidente que las acciones de tortura tienen un objetivo trazado que en la mayoría de las ocasiones persiguen una confesión de la persona que está siendo torturada, sin embargo, en otras ocasiones es utilizada como una forma de castigo hacia un enemigo.

Este tipo de conductas no siempre es evidente, ya que como lo indica Santos (2016) la aplicación de este tipo de métodos se realiza a través de actos sutiles que a pesar de su sistematicidad que obedece a políticas represivas, no resulta fácil de probar en una instancia judicial, debido a la dificultad para probar este tipo de hechos.

Los hechos de tortura psicológica son más comunes de lo que parece en diversos entornos, y van desde la humillación psicológica, hasta la privación sensorial en los casos más extremos, sin embargo, en muchas ocasiones algunos actos que pueden considerarse como hechos de tortura psicológica pueden considerarse normales entre las víctimas y los victimarios (Manero & Villamil, 2007).

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha contemplado que la actuación de un servidor público que dentro su rol e investido de su autoridad estatal cometa algún acto de tortura psicológica u ordene a sus inferiores para que cometa este tipo de hechos, será considerado como autor del mismo (Galdámez, 2006).

Lo anterior, teniendo en cuenta que este tipo de actos suele presentarse en entidades que tienen una estructura de poder o mando organizado, y que la utilización de métodos de tortura psicológica se presenta de manera frecuente en los países que están inmersos en un conflicto armado.

A continuación, se entrará a analizar los elementos de la tortura psicológica, y como pueden llegar a probarse los mismos, en una instancia judicial.

2.1 Elementos de la tortura psicológica:

La tortura psicológica nace como una variación de la tortura física, lo anterior debido a que estos métodos no dejan evidencias palpables a la vista, situación por la cual probar este tipo de conductas reviste una dificultad mayor para la víctima (Madariaga, 2001).

Esta práctica, se ha venido ejecutando dentro de conflictos armados, como estrategia de guerra contra el enemigo, y ha sido utilizada inclusive por las fuerzas armadas o de

inteligencia de los Estados, sin considerar la prohibición que el derecho internacional ha hecho sobre dichos actos (Sánchez & Oliveros, 2014).

Como se puede observar, esta conducta exige entonces que se cause un dolor o sufrimiento en el individuo, y como lo indica Saldarriaga (2009) en caso de la perturbación de la esfera mental del individuo se ha expresado que esto solo puede causarse cuando el mismo se somete por largo tiempo a conductas como la privación del sueño, la exposición a elementos a los cuales el individuo tiene fobias, aislamiento, entre otros.

Respecto de la valoración de elementos para probar que efectivamente se produjo tortura psicológica, Reyes (2007) ha indicado lo siguiente:

Sólo puede haber un “dolor o un sufrimiento mental grave” si se produce un “ataque persistente a la integridad mental”, de “larga duración” y “que se extienda durante meses o incluso años”. Eso significa que para toda calificación objetiva del sufrimiento psicológico se debe confirmar la duración prolongada (p.8).

Es preciso advertir, que por razones históricas se ha mantenido como elemento indispensable para hablar de la comisión del delito de tortura, aquel que hace referencia al elemento teleológico, esto quiere decir que el victimario tiene una intención o finalidad con la comisión de los hechos que vulnerar la integridad física o psicológica de un individuo, y esta es la confesión de culpabilidad, la acusación contra determinada persona o la influencia en la declaración que rendirá como testigo dentro de algún proceso (Nash, 2008).

Ahora bien, la definición como tal de la tortura ha sido recogida por diversos instrumentos normativos del derecho internacional, que hacen referencia a unos elementos concretos sobre este delito. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas e Interamericana señala una serie de elementos integradores en su definición que se señalan en la figura 1 que se muestra a continuación.



Figura 2. Elementos Tortura Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas e Interamericana. Fuente: Elaboración propia (2019).

La figura anterior, permite identificar de manera sucinta los elementos más relevantes definidos dentro de la Convención contra la tortura, en la cual se hace referencia a que la tortura en todo caso debe considerarse como un acto intencional que tiene diversas finalidades como la obtención de información, la confesión, el castigo, entre otros, e identifica al victimario como un funcionario público o una persona que en ejercicio de funciones públicas comete dicho acto.

2.2. Métodos de tortura psicológica utilizados:

Dentro de los métodos de tortura psicológica utilizados que se han logrado documentar a través de diferentes estudios, se ha logrado establecer que la privación del sueño es uno de los métodos más comúnmente utilizados. Sin embargo, no es el único ya que como se observa

en la figura 2, se han diseñado distintas maneras de afectar el ámbito psicológico de los individuos.

| MÉTODOS DE TORTURA PSICOLÓGICA | |
|------------------------------------|--|
| Abusos con excrementos | Mantener desnudo |
| Aislamiento | No permitir estar solo en el baño |
| Amenazas | Presenciar sesiones de tortura a otros |
| Exposición constante a luz intensa | Privación sensorial total |
| Humillación sexual | Privación de sueño |
| Impedir la higiene | Ruidos fuertes |
| Interrogatorios constantes | Simulacro de ejecuciones |

Figura 3. Tipos de tortura psicológica. Fuente: Palomo, Ramos & Santos (2004).

Respecto de los efectos de la privación prolongada Novo (2012) ha expresado lo siguiente:

Tanto la privación total, parcial o selectiva pueden tener alteraciones en la esfera cognitivo-afectiva, los tres tipos de privación han mostrado alteración en el desempeño cognitivo, así como en ocasiones se han provocado alucinaciones sensoriales, en el caso de privación total, alteraciones en el estado de ánimo y en estudios con privación selectiva del sueño MOR⁵ además se han reportado reacciones psicóticas (p.7).

Como se puede observar, si bien la privación del sueño no genera un dolor físico como tal, su prolongación, genera una serie de efectos adversos e importantes en el comportamiento humano, ya que su psiquis se ve afectada por las alucinaciones y los desórdenes que esto genera a nivel psicológico.

Otro de los métodos más utilizados en eventos de tortura psicológica, es el aislamiento, que es definido por Shalev (2008) como el confinamiento de un individuo de manera permanente en espacios donde no tienen contacto con otras personas, en el caso de los reclusos o prisioneros, estos no tienen contacto entre sí.

⁵ Privación del Sueño con Movimientos Oculares Rápidos inducida conductualmente o mediante fármacos. Como lo indica Velázquez (2015) en esta etapa, la actividad eléctrica del cerebro es rápida y de bajo voltaje, muy similar a la que se presenta cuando un sujeto está despierto y concentrado, por lo cual es claro que se trata de una etapa imprescindible para el funcionamiento óptimo del organismo, que permite una mejor calidad de vida. Para ampliar ir a: https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/66_4/PDF/Privacion.pdf

Respecto de los efectos negativos del aislamiento celular, Reyes (2007) ha identificado lo siguiente:

(...) los efectos de un encarcelamiento en régimen celular prolongado (de una duración de entre siete y veinticuatro meses) y observó los siguientes síntomas: ansiedad, nerviosismo, estrés, trastornos del sueño, dificultades de concentración y del habla, así como tendencias suicidas, depresión y síntomas de paranoia. En consecuencia, como lo ha indicado el CPT, el aislamiento celular constituye, cuando menos, una forma de trato inhumano y degradante si se lo aplica durante varias semanas (p.16).

En ese sentido, es importante advertir que los actos crueles infringidos a un individuo con el fin de afectar su ámbito psicológico, causan graves afectaciones a la integridad del mismo, y de su entorno familiar debido a las consecuencias postraumáticas que pueden llegarse a derivar de este tipo de actos.

3. Casos de tortura desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Sistema Interamericano ha revisado diversos casos en los cuales se demanda a los Estados por la comisión de hechos que pueden considerarse como tortura psicológica, por lo que en diversas ocasiones ha realizado un análisis extenso de dicha conducta, resaltando la importancia de que los Estados sean garantes del derecho a la integridad personal de los individuos.

A continuación, se hará un análisis sucinto de casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se acusa a un Estado de cometer actos que pueden considerarse como tortura psicológica.

3.1 Cantoral Benavides Vs. Perú:

En este caso, se pone en conocimiento de la CIDH la detención del señor Luis Alberto Cantoral Benavides por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en Perú, sin que mediara para ello una orden judicial.

Así mismo, señala el demandante que estuvo detenido e incomunicado por varios días, y sometido a actos violentos, como se describe en la sentencia:

A los 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. Asimismo, fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros de la Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado con las manos en la espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del cuerpo, etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, 2000).

Es evidente, que los agentes del Estado vulneraron los derechos del señor Cantoral, ya que no se llevó a cabo un debido proceso en su detención, pero aún más grave él mismo fue aislado e incomunicado alrededor de 15 días, en los cuales fue objeto de diversos actos de maltrato físico y amenazado continuamente con asesinarlo y golpearlo, por parte de agentes de la fuerza pública.

Es importante advertir, que en este caso concreto señala la CIDH que el hecho de amenazar a una persona con el sometimiento a torturas físicas configura un trato cruel, teniendo en cuenta que genera en el mismo una angustia moral y condiciones de miedo insuperable que alteran sus condiciones psicológicas.

La CIDH, expresa al tenor literal:

Amenazar a alguien con torturarlo puede constituir, en determinadas circunstancias, por lo menos un “trato inhumano”. (...) debe tomarse en cuenta, a efectos de determinar si se ha violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia moral. En el marco del examen de comunicaciones individuales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave lesión física como una “tortura psicológica” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, 2000).

Se considera entonces en el marco del derecho internacional que la sola amenaza de infligir dolor a una persona configura por si solo un acto de tortura psicológico, ya que genera en las

personas una angustia moral que lo afecta de manera notoria, por lo cual este hecho debe ser castigado en el marco de lo que se ha entendido como tortura psicológica. Pero este no ha sido el único pronunciamiento relevante de la CIDH, como se observará a continuación.

3.2 Maritza Urrutia Vs. Guatemala

En este caso se denuncia ante la CIDH la detención arbitraria y tortura a la que fue sometida la señora Maritza Urrutia por parte de agentes de la fuerza pública de Guatemala. Relata la demandante que el 23 de julio de 1992 fue detenida y obligada a abordar un automotor, para la época de dicha detención ella desempeñaba tareas políticas dentro de la organización revolucionaria Ejército Guerrillero de los Pobres (en adelante “EGP”).

En medio de la detención, la señora Maritza Urrutia fue interrogada en diversas ocasiones y amenazada, como se expresa dentro de la Sentencia:

Sus secuestradores la presionaron para que les diera información, la amenazaron con que la iban a matar y le dijeron que tenían a su hijo en una habitación. Estaba muy nerviosa y alterada, especialmente porque pensaba que habían secuestrado a su hijo. Durante el interrogatorio, sus captores le mostraron unas fotografías que les habían tomado a ella y a su familia, tres cartas que Maritza había enviado al padre de su hijo por medio de correos internos del EGP, un casete que ella había grabado para Esteban con la voz de su hijo y fotos de cadáveres destrozados y mutilados en los frentes de guerra, y le manifestaron que así iba a aparecer ella, si no colaboraba. Todo esto le causó mucho temor (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, 2003).

En su análisis la CIDH indica que, pese a que la señora Maritza Urrutia no fue objeto de ningún tipo de agresión física, se presentaron una serie de actos que la afectaron psicológicamente, como lo es el aislamiento, las continuas amenazas en contra de su familia y la incomunicación total.

Deja claro, en este aspecto esta corporación que la tortura puede configurarse aun cuando no se realice ningún tipo de agresión física. Al respecto, Martínez, Garay & Cubides (2017) señala que debe considerarse como tortura todo acto que le genere a un individuo una

aflicción moral o un sufrimiento mental, teniendo en cuenta que estos caben perfectamente en la definición que ha dado el derecho internacional sobre tratos crueles e inhumanos.

Así entonces, es claro que la utilización de métodos ilegítimos en interrogatorios por parte de agentes del Estado se debe considerar como un hecho de tortura psicológica.

4. Los actos de tortura psicológica en Colombia.

En el caso concreto de hechos de tortura psicológica en el Estado colombiano es importante advertir que se han evidenciado ciertos casos específicos en los cuales diversos agentes estatales han desplegado actos en contra de individuos que han tenido una incidencia negativa en la esfera psicológica de los mismos, para lo que se abordará el pronunciamiento de la CIDH respecto del caso de la periodista Julieta Duque.

4.1 Caso de la periodista Claudia Julieta Duque:

Un ejemplo de lo anterior, es las medidas cautelares decretadas en contra del Estado colombiano por el caso de la periodista Claudia Julieta Duque y un menor de edad, cuyo nombre se reserva por circunstancias de seguridad, quienes presuntamente fueron objeto de actos de acoso por parte de agentes de la fuerza pública colombiana, en diversas ocasiones la señora Duque solicitó que fueran asignados en su esquema de protección escoltas de su confianza, ante la sospecha de la intromisión en su vida personal y divulgación de hechos de su vida privada sin su consentimiento, sin embargo no obtuvo respuesta por parte de las autoridades colombianas.

Al conocer este hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide como medida cautelar ordenar al Estado colombiano el cambio del esquema de protección y que le permitiera acceder a la información que sobre ella se había recopilado y reposaba en los archivos del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Posteriormente, en el año 2018 la periodista y su hija deciden demandar el Estado colombiano ante la CIDH por las graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios de los que fueron víctimas por parte de agentes del DAS.

Es necesario advertir que la señora Claudia Duque fue objeto de persecuciones por parte de agentes del DAS, que la seguían, interceptaron sus comunicaciones, realizaban llamadas a su

teléfono preguntando por su hija menor de edad para la época, la amenazaban de muerte a ella, a su hija, a sus padres, entre otros hechos, que surgen debido a la investigación que realizaba la periodista por el homicidio del también periodista Jaime Garzón (Ferreira, 2016).

En este caso concreto, es preciso advertir en primer lugar, hasta la fecha no se han individualizado y condenado a todos los responsables de este hecho, por lo que se puede colegir que el Estado ha incumplido con su deber al respecto, tal y como se puede identificar en la medida cautelar que se ordenó por parte de la CIDH⁶.

Pero dicho caso, no ha sido en el único que se ha presentado en Colombia, ya que la jurisdicción penal interna también en los pocos procesos en los que se han condenado a los agentes que participaron en este hecho se ha referido al tema, acogiendo desde luego los preceptos que en materia de derecho internacional se ha hecho frente al tema.

En ese sentido, y en relación con este mismo caso dentro del juzgamiento de uno de los agentes del DAS condenados, reconoce la dificultad que en materia probatoria resulta probar un acto de tortura psicológica:

La constatación del dolor o padecimiento soportado por el ofendido, no siempre es fácil, pues, en ocasiones, no quedan rastros o huellas del ultraje, sobre todo, cuando es de naturaleza moral; por eso, de cara al principio de libertad probatoria, no podría reclamarse la necesaria comprobación del delito a través de una experticia médica o técnica, sino que cobra especial relevancia la prueba testimonial (Corte Suprema de Justicia, Exp. SP9145, 2015).

Es preciso en ese sentido, identificar que el adecuado juzgamiento de este tipo de delitos debe ser una construcción de las autoridades judiciales que para esto deberán remitirse a la jurisprudencia que en materia internacional existe sobre el tema, teniendo en cuenta que las autoridades penales poco han incursionado en este análisis.

⁶ Para ampliar información, remitirse al escrito de la medida cautelar emitida por la CIDH en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/decisiones_cidh_cautelares.asp

Conclusiones

A partir de lo señalado en el presente artículo se puede evidenciar que en Colombia se han logrado identificar una serie de hechos que pueden clasificarse como eventos de tortura psicológica en el marco de lo analizado, ya que es claro que se ha afectado la esfera emocional de los individuos.

En ese sentido, si bien se han documentado varios casos que pueden ser considerados como hechos de tortura, la legislación penal colombiana no ha desarrollado de manera amplia la imputación de este tipo penal.

Ahora bien, respecto de la pregunta de investigación y de acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede indicarse que en Colombia se han identificado una serie de hechos de tortura psicológica derivada en su mayoría de instituciones de la fuerza pública quienes a través de la utilización de medios ilegítimos en un interrogatorio terminan afectando la esfera psicológica del individuo.

De igual manera, es necesario advertir que en Colombia no se imputa de manera frecuente el tipo penal de tortura en su modalidad psicológica, sin embargo, establecer la utilización de métodos ilegítimos en interrogatorios, no resulta una tarea imposible, teniendo en cuenta que los manuales de policía judicial establecen el procedimiento de interrogatorio de manera explícita y aquellos derechos que tiene la persona a la cual se está interrogando.

en ese sentido, si bien se han documentado varios casos que pueden ser considerados como hechos de tortura, la legislación penal colombiana no ha desarrollado de manera amplia la imputación de este tipo penal. Lo anterior, teniendo en cuenta la dificultad que en materia procesal y probatoria implica la imputación de este tipo penal.

En este aspecto y como una muestra de la lucha contra las diferentes expresiones de violencia derivada de las organizaciones que presentan estructuras de poder como la fuerza pública, es necesario que se realicen capacitaciones frente a los efectos de las malas prácticas dentro de los interrogatorios y la importancia de ceñirse a los protocolos establecidos para los interrogatorios por parte de los agentes del Estado, con el fin de que se garanticen los derechos de las personas interrogadas.

Referencias

- Aguilar, G. (2016). Las normas de ius cogens y el orden jurídico interno: una evolución progresiva y prometedora. *Estudios constitucionales*, 14(1), 341-348. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-52002016000100012&script=sci_arttext
- Arenas, L., & Cerezo, A. I. (2016). Realidad penitenciaria en Colombia: la necesidad de una nueva política criminal. *Revista Criminalidad*, 58(2), 175-195. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-31082016000200007&script=sci_abstract&tlng=es
- Ávila, H. L. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación*. (1ed). Editorial Juan Carlos Martínez Coll.
- Bernal, C. A. & Moya, M. F. (2018). Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Apuntes preliminares. En C. A. Bernal Castro, M. F. Moya Vargas, J. Carvajal Martínez & M. Tirado Acero. *Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano*. (pp. 137-151). Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Cubides, J., Grandas, A. M. & González, J. M. (2016). Constitucionalismo Multinivel (CM): el nuevo paradigma en la protección de los Derechos Fundamentales. En J. Cubides Cárdenas, J. M. González Garcete, A. M. Grandas Ferrand, J. E. León Molina & M. A. Prieto Salas. *Perspectivas del constitucionalismo* (pp. 45-60). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Galdámez, L. (2006). La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista CEJIL*, 1(2), 89-100. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24796.pdf>
- Guerra, D., & Ruiz, G. (2011). El delito de tortura en la legislación colombiana y su contraste con la normatividad internacional. *Revista Justicia*, 16(19). Recuperado de <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/view/907>.

- González Monguí, P. E. (2017). Delitos contra la autonomía personal. En P. E. González Monguí. Delitos contra la libertad individual y otras garantías (pp. 201-291). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Madariaga, C. (2001). Tortura y trauma psicosocial. Revista Reflexión, 27, 5-9. Recuperado de <http://cintras.org/textos/reflexion/r27/torturaytraumapsicosocial.pdf>
- Manero, R., & Villamil, R. (2007). Notas sobre violencia, tortura, terrorismo de Estado y erotismo. El cotidiano, 1(1), 18-25. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/325/32514303.pdf>
- Martínez, A. J., Garay, C. P. & Cubides, J. (2017). Criterios vinculantes a la jurisdicción militar en los casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En J. Cubides Cárdenas, P. A. Barreto Cifuentes, C. E. Castro Buitrago, J. Castro Ortiz, N. Chacón Triana, C. P. Garay Acevedo, A. J. Martínez Lazcano, S. Montoya Ruiz & C. Rodríguez Bejarano. Desafíos contemporáneos de la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano (pp. 57-84). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Naranjo, G. (2001). El desplazamiento forzado en Colombia: reinención de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacionales. Scripta Nova, (94), 1-17. Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/5658/1/NaranjoGloria_2001_DesplazamientoforzadoColombiaIdentidad.pdf
- Nash Rojas, C. (2008). Alcance del concepto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano XV(1). 585-601. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23545.pdf>
- Novo, C. (2012). Efectos de la privación de sueño en la esfera neurológica y del comportamiento. Consequences of sleep deprivation on cognition and behavior. Revista NeuroScopic: Integral Neurodiagnostics. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/303299636_Efectos_de_la_privacion_de_sueno HYPERLINK
["https://www.researchgate.net/publication/303299636_Efectos_de_la_privacion_de_sueno"](https://www.researchgate.net/publication/303299636_Efectos_de_la_privacion_de_sueno)

ueno en la esfera neurologica y del comportamiento Consequences of sleep de
privation on cognition and behavior"en la esfera neurologica y del comportami
ento Consequences of sleep deprivation on cognition and behavior

Novoa, L. D., & Escamilla, D. (2017). La memoria del conflicto armado en Bucaramanga: análisis de una experiencia investigativa desde las voces de las víctimas. El Ágora USB, 17(2), 497-512. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00497.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2003). Folleto sobre la prevención de la Tortura. Informe. Madrid: España. Recuperado de <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4Rev.1sp.pdf>

Palomo, J., Ramos, V., & Santos, I. (2004). Muerte en privación de libertad (MPL). Cuadernos de Medicina Forense, (35), 37-50. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062004000100004&lng=es&tlng=es.

RAE. (2019). infligir. Diccionario de la lengua española. - Edición del Tricentenario Recuperado de <https://dle.rae.es/?id=LXWKnkA>

Reyes, H. (2007). Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica. International Review of the Red Cross, 867, 1-30. Recuperado de <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc-867-reyes.pdf>

Saldarriaga, G. (2009). Psicólogos y tortura: notas sobre la batalla por el futuro de la psicología. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 1(2), 61-82. Recuperado de <http://rccp.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/10021>.

Sánchez, C. L., & Oliveros, S. (2014). La reparación integral a las víctimas mujeres: Una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano. Universitas Estudiantes, 11, 163-185. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33893.pdf>

Santos, J. (2016). Los centros de detención y/o tortura en Chile: Su desaparición como destino. Izquierdas, (26), 256-275. Recuperado de

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50492016000100010&script=sci_arttext

Shalev, S. (2008). Libro de referencia sobre aislamiento solitario. (1th ed.). Inglaterra: Editorial Oxford University.

Suárez, C. (2007) El delito de tortura a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Revista Análisis Internacional (RAI) N° 7, Bogotá. Recuperado de <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/869/881>

Velásquez, F. (2010). Manual de Derecho Penal. Parte General (4th ed.). Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.